

**EN COLINA, A 31 de mayo de 2025,**

Esta Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, reunida después del debate de rigor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal, ha resuelto, por votación unánime, absolver a Javier Ignacio Parra Ulloa como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte, en grado de consumado, previsto y sancionado en los artículos 150 letras D) y E) N°1, en relación con el artículo 391 todos del Código Penal, en la persona de doña María Ignacia Andrea Pérez Barriga, puesto que los antecedentes de la atribución penal que trajo el Ministerio Público a estrados consistentes en prueba testimonial, pericial, documental, videograbaciones, fijaciones fotográficas y evidencia material, las que se valoraron libremente, según lo preceptuado por el artículo 297 del Código Procesal Penal, sin contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, resultan, por una parte que se advierte una infracción de garantías fundamentales vinculados con el derecho a defensa y, adicionalmente, porque la prueba producida y presentada resultó insuficiente para que el Tribunal adquiriera la convicción, más allá de toda duda razonable, respecto de los hechos materia de la acusación fiscal, en los términos planteados por el ente persecutor.

Así, en primer término y sin entrar aún en el fondo de la controversia, se logró advertir por estos jueces la existencia de una infracción a lo que dispone el artículo 259, literal b) del Código Procesal Penal y que incide en el derecho a defensa y, eventualmente, en la congruencia de la decisión jurisdiccional.

En efecto, de la lectura de la propuesta fáctica acusadora se advierte que existe una indeterminación del lugar y momento en que el acusado habría percutado el disparo que cobró la vida de la víctima, ya que según distintos pasajes de los hechos, se puede inferir que posiciona al agente o sujeto activo, disparando en contra del móvil en que se desplazaba la víctima,

cuando éste se encontraba en movimiento y previo a una eventual colisión con otro vehículo motorizado, mientras que, según otros párrafos de la misma propuesta, se puede sostener que la conducta incriminada central ocurrió cuando el vehículo estaba detenido, después de haber colisionado. Momento y dinámica que, para este caso, resulta determinante, porque en el primer escenario se puede alegar, tal como lo hizo la defensa, la existencia de un peligro inminente o actual para terceras personas que se encontraban a bordo del vehículo que luego fue colisionado. Hipótesis que no es posible sustentar si el vehículo en que iba la víctima ya se encontraba detenido y no representaba tal peligro.

Lo anteriormente señalado, se desprende de varios párrafos de la descripción factual. Así, en un primer párrafo se sostiene que los hechos traídos a juicio ocurrieron a la “altura aproximada de la intersección de avenida Ecuador y calle Errázuriz, en la comuna de Lampa” y continúa sosteniendo que “el acusado apuntó y disparó su arma de fuego ... una vez que el vehículo Peugeot modelo 3008 ya lo había sobrepasado”, sin precisar si aquello ocurrió antes, durante o después de la colisión. Mientras que en otro párrafo plantea que el acusado disparó desde la calzada luego haber descendido del vehículo institucional que lo trasladaba cuando el vehículo Peugeot lo había sobrepasado y tanto el vehículo mismo como sus tripulantes ya no suponían una amenaza de agresión activa para él, para el subcomisario Orellana Campos, ni para alguno de los demás funcionarios policiales que participaban en el procedimiento y que tripulaban los vehículos de la PDI, relato que da a entender que el disparo mortal en contra del vehículo Peugeot se efectuó en algún momento posterior a la colisión, porque solo ahí dejó de existir el eventual peligro o amenaza de agresión que representa una posible colisión de frente entre dos vehículos motorizados.

Lo indicado, no solo importa una vulneración al derecho a defensa, sino que también al debido proceso en relación a la obligatoriedad de exponer de manera clara los hechos al Tribunal para la resolución del asunto

sometido a su conocimiento, más aún tomando en consideración que durante el desarrollo del juicio oral consonante con la imputación fáctica de la acusación, se incorporó prueba de cargo que pretendía situar al acusado en distintas posiciones.

Efectivamente, por un lado, los funcionarios policiales que participaron del procedimiento policial ocurrido aquel 12 de octubre de 2020, fueron contestes en situar a Parra Ulloa al momento de realizar el disparo en la calzada de Avenida Ecuador en Batuco, Lampa, momentos antes de que el vehículo Peugeot conducido por Pacheco Salas colisionara con el Nissan Terrano de propiedad de la Policía de Investigaciones, relato que se mantuvo en el tiempo por aquellos en las distintas instancias en que les correspondió relatar los hechos. Por otro lado, la segunda posible tesis fiscal intentaba posicionar con sus probanzas a Javier Parra en la intersección de calles Ecuador con Errázuriz de la misma comuna, tomando en consideración para ello en haber sido encontrada la vaina percutida por el arma del acusado en dicho lugar, no obstante que según la prueba pericial de descarto demostró que aquella detentaba una gran cantidad de líneas, deformaciones y marcas que dan cuenta de roces sufridos por aquella posteriores al uso del arma; en las declaraciones de Luis y Kevin Pacheco, quienes señalaron no haber escuchado ningún disparo, y en la declaración de una presunta testigo presencial -Génesis Soto- quién, según testigos de oídas, aseguró haber escuchado desde el interior de su domicilio el ruido de un choque y a continuación el de un disparo, no obstante que revisadas las videograbaciones inmediatamente posteriores a la ocurrencia de los hechos, no fue posible advertir la presencia de aquella en el lugar como lo había señalado, todo lo cual la fiscalía graficó, recreó y fotografió, pretendiendo dar cuenta que el disparo fue efectuado en dicha intersección con el vehículo de Pacheco ya detenido, probanzas que resultaron desacreditadas, como se explicitará en el fallo.

Así, en base a lo expuesto, queda en evidencia que es posible ubicar al acusado en distintos lugares y momentos disparando en contra del vehículo Peugeot 3008, de donde resulta una propuesta fáctica que no da cuenta de una relación clara y circunstanciada de los hechos imputados, en cuanto a su centralidad.

Ahora, no obstante los defectos indicados, y adentrándonos en el fondo del asunto, el cúmulo de antecedentes de cargo permitió a estos jueces arribar en síntesis a las siguientes conclusiones fácticas y jurídicas que se pasan a exponer:

1° Que, el día 12 de octubre del año 2020, en horas de la mañana, en Avenida Ecuador en dirección al norte, en la comuna Lampa, tres vehículos de la Policía de Investigaciones de Chile, y en cuyo interior de uno de ellos se movilizaba el detective Javier Parra Ulloa junto a otros tres funcionarios policiales, en el marco de un procedimiento policial de determinación del domicilio de Luis Pacheco Salas, quien mantenía una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Garantía de Colina por el delito de homicidio simple, interceptan el vehículo conducido por aquél para efectos de efectuarle un control de identidad, descendiendo Parra del móvil en compañía del Subcomisario Orellana, y González, identificándose como policías, no logrando la detención del móvil, el que acelera dirigiéndose en su contra, para luego continuar su marcha hacia el otro vehículo policial que se encontraba a metros del lugar.

2° Que, en las circunstancias anteriores, y atendido el peligro inminente de que Pacheco Salas colisionara el vehículo policial Nissan Terrano PPU CVTT 91, Parra Ulloa profirió un disparo hacia el automóvil Peugeot PPU LBRC 12, impactando a María Ignacia Andrea Pérez Barriga, ocasionando su posterior fallecimiento.

3° Que, la acción descrita, a juicio de estos sentenciadores, se encuentra debidamente amparada en el ejercicio legítimo de la fuerza, que el

Estado le otorgó al acusado al detentar el cargo de detective de la Policía de Investigaciones de Chile, puesto que al efectuar un disparo con su arma de fuego, lo hizo en pleno cumplimiento a la normativa nacional e internacional, reglamentos y principios a los que se encontraba sujeto, contenidos en la circular N°2615, esto es, cartilla sobre uso de la fuerza, normativa vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos. Ciertamente, en particular, acató los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad en cuanto al uso de la fuerza.

En efecto, cumple el acusado con el primero de los principios indicados, ya que su actuar estuvo al servicio de un objetivo legítimo establecido por la ley, empleando los medios necesarios y disponibles en el procedimiento y actuación policial; cumplió con el segundo, esto es, el principio de necesidad, puesto que Javier Parra hizo uso de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, ya que para lograr la detención del vehículo que conducía Pacheco Salas y su posterior control de identidad, se identificó como funcionario de la Policía de Investigaciones de manera verbal y portando su placa identificatoria; ajustó su actuar al principio de proporcionalidad, puesto que Parra Ulloa procedió a realizar un único disparo y sólo cuando aquello resultó forzoso, ponderando la resistencia del agresor a acatar las órdenes policiales, y la existencia de un peligro inminente de que Pacheco ocasionara un daño a la integridad física de terceras personas, en este caso, a otros funcionarios policiales; finalmente, esta sala estimó que el actuar de Parra se ajustó al principio de racionalidad, puesto que hizo uso de su arma de fuego por medio de una acción ineludible, para impedir o repeler una agresión ilegítima, actual o inminente.

4° Que, relacionado con el principio de necesidad, y en base a las alegaciones del acusador desde el punto de vista de la idoneidad del disparo, resulta evidente que éste no resultó eficaz para detener el vehículo, pero debe valorarse si la decisión de disparar fue razonable y justificada ante una

amenaza inminente, según las circunstancias percibidas por el agente en ese momento.

5° Que, a su vez, es relevante hacer hincapié que la forma en que deben ser interpretados estos principios es en concreto, y no en abstracto, es decir, en base al contexto en que se desarrollaron los hechos, que fueron relatados por testigos presenciales de los mismos, de manera concordante en lo medular.

En efecto, el acusado fue citado junto a un grupo de funcionarios policías de la BIRO Sur a una reunión en las dependencias de su agrupación, con la finalidad de dar a conocer y exponer los antecedentes en que tuvo lugar un homicidio frustrado cuya víctima era un funcionario de la misma institución ocurrido días previos, habiendo sido verificada la identidad de dos de los sujetos que supuestamente habían cometido dicho ilícito, siendo uno de ellos Luis Pacheco Salas, quien además mantenía una orden de detención vigente por otro delito de homicidio, así como también habiéndose verificado los vehículos en que aquellos normalmente se desplazaban, debiendo comprobar su domicilio por orden del fiscal a cargo -Felipe Olivari Vargas- y con la finalidad que éste obtuviera las correspondientes órdenes de detención y de entrada y registro, es decir, se trataba de un sujeto que, según información objetiva era peligroso; que al llegar al lugar son advertidos de la presencia de un vehículo donde presuntamente se trasladaba Pacheco Salas, el que por tener sus vidrios polarizados no fue posible identificar a los ocupantes, intentando la detención del mismo identificándose como policías, pero ante aquello el conductor no sólo no acata la orden recibida de detener la marcha del móvil, sino que aceleró el vehículo, dirigiéndolo en contra de ellos, y luego de haberlos traspasados avanza directo, sin frenar, hacia el vehículo policial que se encontraba desplazándose por la intersección de calles Ecuador con Errázuriz en cuyo interior se encontraban otros policías.

Así, este cúmulo de antecedentes es el que tuvo en vista el acusado al momento de decidir disparar en contra del móvil, el de enfrentarse a una

persona imputada por dos delitos de homicidio, que conducía un vehículo que no permitía ver hacia su interior ya que mantenía un polarizado fuera de norma, que frente a la orden dada por ellos no detiene el vehículo, acelerando, arremetiendo el mismo en su contra, y que luego se dirige de manera directa hacia el vehículo tripulado por sus compañeros de funciones.

6° Que, producto del disparo recibido, María Ignacia Pérez Barriga, perdió la vida minutos después en el centro asistencial donde fue trasladada por el propio acusado, quién al verla herida en el asiento posterior del copiloto, de inmediato intentó ayudarla, tomándola en sus brazos, sacándola del vehículo, para luego subirla a otro automóvil que la llevaría al Cesfam más cercano, en cuyo trayecto intentó mantenerla con vida pidiéndole que no se durmiera. Que, el hecho del fallecimiento de la víctima y que aquél haya tenido lugar como consecuencia del disparo proferido por el acusado, fue acreditado mediante prueba pericial, fotográfica, testimonial, y documental. Así, la perito médico legista, Vivian Bustos Baquerizo, examinó el cuerpo el mismo día de su fallecimiento y días después al efectuar la autopsia de este, quién concluye en su informe que se trataba de una muerte traumática balística atribuible a la acción de un tercero, lo que se vio refrendado con las fotografías que le fueron exhibidas, y con la incorporación del correspondiente certificado de defunción.

7° Que, los hechos expuestos no logran configurar el delito fundante de la acusación, esto es, apremios ilegítimos con resultado de muerte, al no concurrir todos y cada uno de los elementos de dicha figura, prevista y sancionada en los artículos 150 letras D) y E) N°1 del Código Penal. En efecto, el ilícito imputado requiere para su configuración de los siguientes requisitos, a) que el sujeto activo sea un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, b) que cometa el hecho con abuso del cargo, c) que ejecute un acto por el cual infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, que no alcancen a

constituir tortura; y, d) que con ocasión de la acción del agente se ocasione la muerte del ofendido.

8° Que, en particular al momento de los hechos el acusado detentaba la calidad de empleado público, específicamente el grado de detective de la Policía de Investigaciones de Chile, de dotación en la Brigada de Robos Metropolitana Sur, en ejercicio de sus funciones, quién como ya se explicitó, formaba parte de una agrupación que participó de un procedimiento policial destinado a comprobar el domicilio de imputados por un delito de homicidio frustrado contra un funcionario policial ocurrido días antes en la comuna de Lampa, todo lo cual no fue objeto de discusión entre las partes, incorporándose para acreditar aquello, entre otras, prueba documental consistente en el decreto de su nombramiento y su hoja de vida funcionaria, los testimonios de sus compañeros de armas, y videograbaciones que dan cuenta de una parte del procedimiento.

9° Ahora, estos jueces disienten con lo expuesto por los acusadores de haber actuado Parra Ulloa con abuso del cargo, puesto que se estima que aquél utilizó su arma de fuego ajustándose a los protocolos, reglamentos, y los principios que regulan el uso de la fuerza y del armamento, encontrándose amparado por aquellos que autorizan su uso cuando se encontrare en peligro su integridad física o la de terceras personas, que fue lo que efectivamente tuvo lugar en la especie, resultando acreditado que el vehículo conducido por Pacheco Salas una vez que traspasa a Orellana y Parra, embiste en contra de la camioneta policial Nissan Terrano que, ante tal situación frenó y en cuyo interior se encontraban otros funcionarios policiales, existiendo por tanto un riesgo actual y real para la integridad del grupo de funcionarios que concurrieron al lugar, circunstancias que resultaron acreditadas, en especial, con el testimonio de quienes presenciaron y participaron de los hechos, elementos probatorios que serán analizados pormenorizadamente y ponderados en el fallo, que dan cuenta de la dinámica en que se desarrollan los hechos, estimando que su actuar fue

del todo proporcional a la conducta refractaria desplegada por Pacheco Salas.

10° Que, finalmente, se logró evidenciar, durante el desarrollo del juicio oral, una serie de deficiencias probatorias, como por ejemplo el extravío de parte de las pericias de la reconstitución de escena, y fotografías de la misma, sin determinar las piezas afectadas por aquello, y producto de lo cual se intentó llenar dicho vacío con la confección de nuevos peritajes los cuales tuvieron como insumos para ello, la declaración del acusado por medio de los recuerdos de un funcionario de carabineros, lo que no hace más que restarle valor probatorio a los mismos.

Todas las demás alegaciones que hayan formulado los intervinientes serán resueltas en la sentencia definitiva que será redactada por la Magistrada María Paola Paredes Vega, quien ha dado lectura a la presente acta.

La audiencia de comunicación de fallo se efectuará el día 19 de junio del presente año, a las 11:00 horas.

Resolvió la sala integrada por el juez Rene Subiabre Pérez, y las juezas doña Massiel Guajardo Pacheco y doña María Paola Paredes Vega.